

Purgatorios para inocentes

[Pablo Díez](#)

Los centros de detención y deportación son el destino generalizado de los inmigrantes en situación irregular, pero hay otras soluciones.



Una de las flaquezas que se le pueden achacar a este mundo es no haber encontrado una forma de mitigar las causas que alimentan la inmigración irregular. Otra es tratar a estas personas como a delincuentes y encerrarlas en centros de internamiento hasta que son deportadas. No es un hecho aislado, sino la práctica común de los grandes países receptores. Personas que huyen de la pobreza o de la tortura, solicitantes de asilo o víctimas del tráfico de seres humanos, son sistemáticamente encerrados en centros en los que cumplen *penas* indefinidas y pueden ser víctimas de abusos o sufrir condiciones indignas.

La historia se repite, con matices, en el destino final o intermedio de todas las grandes rutas de la inmigración irregular. Estados Unidos llega a albergar hasta a [429.000 inmigrantes en 250 centros de internamiento](#), a pesar de que en la inmensa mayoría de los casos no tendría que ser necesario detenerlos como paso previo a la deportación. Aunque organizaciones como [Amnistía Internacional](#)

insisten en que encerrarlos de forma sistemática vulnera el derecho internacional, el aumento de las detenciones ha llevado a que el 67% de los inmigrantes irregulares en EE UU se encuentren internos en prisiones convencionales y el resto en centros gestionados por las autoridades de inmigración y por operadores privados. Además, las condiciones de los centros son deficientes: los inmigrantes son mezclados con los reclusos comunes, el acceso a servicios médicos o de asistencia psicológica es inadecuado y, en algunas ocasiones, son sometidos a [confinamiento solitario](#). Frente a esta situación, la futura puesta en marcha de la reforma migratoria contiene elementos prometedores, como potenciar las alternativas a la detención de los inmigrantes mediante instrumentos como los dispositivos de seguimiento.

El debate en torno a estos centros es especialmente intenso en Australia. En la actualidad, hay allí más de 10.000 inmigrantes irregulares detenidos, [sin que exista un tiempo máximo de cautividad permitido](#). El centro de detención de inmigrantes más conocido del país, situado en Christmas Island, en pleno Océano Índico, saltó al primer plano de la actualidad en junio después de que una avalancha de demandantes de asilo desbordara las capacidades del recinto. Operado por una empresa británica, cuenta con un largo historial de incidentes como automutilaciones y huelgas de hambre (en total, se registran al año unos 2.400 incidentes, sobre un total de cerca de 4.200 detenidos).

Australia ha confiado la detención de algunos inmigrantes que se dirigen a sus costas a otros países, como Indonesia o Papúa Nueva Guinea. Ante el crescendo migratorio experimentado a lo largo de este último año, sobre todo por la llegada masiva de solicitantes de asilo de países como Irak, Afganistán o Sri Lanka, el Gobierno del laborista Kevin Rudd, recientemente derrotado, cerró un acuerdo para internar a los demandantes de asilo que se dirigen a Australia en el centro de detención de Manus Island (Papúa Nueva Guinea), que ha sido escenario de violaciones de los derechos humanos. Es cierto que son muchas las vidas perdidas en el mar por intentar alcanzar las costas australianas y que, además, es un negocio del que se lucran los traficantes de seres humanos, pero enviar a los indocumentados a un país mísero en el que afrontan consecuencias inciertas es un método de disuasión éticamente cuestionable.

El Mediterráneo también se lleva cada año la vida de muchos inmigrantes. El último caso que ha creado estupor es la muerte de cientos de personas frente a la isla italiana de Lampedusa. En otras travesías menos trágicas y difundidas, el destino que les espera a los emigrados sin papeles que arriban a Italia es ser encerrados en centros de identificación y expulsión. Pero las críticas a los países receptores o de tránsito del Mediterráneo se han centrado en especial en Grecia, que en los últimos tres años ha sido condenada varias veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las malas condiciones en las que se encuentran los inmigrantes detenidos y por su baja tasa de aceptación de solicitudes de asilo. El malestar de los reclusos

en Grecia explotó en agosto, cuando en el centro de detención de [Amygdaleza](#) los internos se rebelaron después de que a 1.200 de ellos se les informara de que su detención podría durar hasta 18 meses.

España, otro de los grandes puntos de entrada migratoria, cuenta con ocho centros de internamiento de extranjeros (el año pasado se cerró uno en Málaga por sus pésimas condiciones). Según la organización [Pueblos Unidos](#), éstos no reúnen las condiciones adecuadas, producen un fuerte impacto psicológico sobre los internos y albergan a una inmensa mayoría de personas sin antecedentes penales; en algunos casos, la negligencia y la falta de servicios médicos adecuados han llevado a la muerte de internos. Ante todos estos problemas, los países del sur de Europa alegan la imposibilidad de hacer frente a tanta presión migratoria, escudándose en la privación de recursos a los que les somete la austeridad presupuestaria y apelando a la solidaridad de la Unión Europea con la máxima de que la inmigración es un “problema europeo”.

Por el momento, la petición de ayuda de los países de la Europa meridional no se manifiesta en un esfuerzo comunitario por mejorar los centros, sino más bien en reforzar la vigilancia. Tras la tragedia de Lampedusa, la Comisión Europea propuso desplegar un equipo de patrullas de rescate e interceptación de embarcaciones con inmigrantes en situación irregular. También se contempla una intensificación de la cooperación con Marruecos y otros destinos de tránsito clave para frenar a los inmigrantes africanos en su trampolín a Europa. Se trata de medidas que deberían ser complementarias y, en ningún caso, pueden ser un sustituto a la dignificación de los centros de detención o al imprescindible cambio normativo que impida que tantos inocentes se encuentren recluidos en ellos.

No todos los inmigrantes africanos se dirigen hacia el Norte, sino que un número importante de ellos avanza, en dirección contraria, hacia el gran polo de la inmigración continental: Suráfrica. Allí llegan miles de emigrados de los vecinos Zimbawe y Mozambique, pero también de Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán o Etiopía. La ruta es distinta, pero el destino inmediato tiene similitudes con el que les esperaba en Europa: centros de detención y deportación como [Lindela](#), en las afueras de Johannesburgo, donde llega a haber hasta 54 internos en habitaciones diseñadas para 18 y donde la corrupción permite que los que disponen de cien dólares puedan comprar su libertad sobornando a policías y agentes de inmigración.

El debate sobre las condiciones de detención de los inmigrantes pendientes de deportación a veces ensombrece un hecho clave: encerrarlos sólo es admisible cuando no hay otra forma de asegurar que cumplirán con las órdenes de expulsión, o cuando supongan una amenaza real para la comunidad. En los demás casos, opciones menos restrictivas que el encarcelamiento

tradicional, como los dispositivos de seguimiento, deberían ser la norma. Pero aun cuando el uso de alternativas a la detención podría ahorrar sufrimientos adicionales a los inmigrantes, el problema es más profundo. A la larga, sólo una normativa más abierta a aceptar a estas personas en los territorios en los que recalán puede poner freno a su criminalización y a la privación inmerecida de su libertad.

Artículos relacionados

- [Cinco cosas que hacer para cerrar Guantánamo.](#) **Mario Saavedra**
- [Siete preguntas: ¿Cómo cerrar Guantánamo?](#)
- [La ofensiva de Estados Unidos contra la inmigración.](#)
- [La Lista: las principales rutas de la inmigración ilegal.](#)
- [La Lista: los mejores países para ser inmigrante.](#)
- [Europa tiene miedo.](#) **Ana Carbajosa**

Fecha de creación

23 octubre, 2013